

El reemplazo de las elites políticas en el Perú

Romeo Grompone

Romeo Grompone: Sociólogo, profesor universitario; investigador del Instituto de Estudios Peruanos - IEP, Lima.

En el Perú predomina un estilo de intervención en la vida pública donde no puede identificarse una clase política ni la presencia de mediaciones partidarias. Puede dudarse de la existencia de élites a este nivel. En el congreso y en las alcaldías provinciales y distritales ocupan cargos electivos personas que proclaman su independencia o forman parte de movimientos que apoyan a Alberto Fujimori, sin una estructura estable, y con una explícita falta de interés por establecerla para no repetir, en su opinión, los vicios y la rigidez de los partidos. Esta situación se da en el contexto de la extensión de ámbitos de actuación del Estado al margen de la fiscalización ciudadana. La descripción e interpretación de este proceso es indispensable para entender las nuevas formas de representación y acción políticas.

Los partidos políticos peruanos parecen haber terminado su ciclo histórico. En las elecciones de abril de 1995 ninguno obtuvo el 5% de los votos necesario para su reconocimiento legal y uno de ellos, Acción Popular, que lidera Belaúnde, partido de gobierno entre 1963 a 1968 y 1980 a 1985, se precia de haber conseguido el número necesario de firmas para su reinscripción pocos meses después. De la lucha por el poder se pasa a la lucha por la supervivencia en un plazo relativamente corto. ¿Y qué resta de aquellos partidos como el APRA y la izquierda que los sociólogos y politólogos asociábamos a identidades fuertes, ideologías rígidas, historia de exilio, cárceles y persecuciones que forjaron una cultura de compromiso? Ahora estas organizaciones tienen 10 de los 120 escaños del congreso. Los cuatro representantes de Acción Popular y los tres del conservador Partido Popular Cristiano completan los 17 congresistas electos invocando una representación de partido. Podemos agregar algunas personalidades electas por la Unión por el Perú de Pérez de Cuellar, que no eran hostiles a los partidos políticos, pero de los cuales tomaban distancia. El resultado sigue siendo desconsolador para los movimientos organizados.

Decadencia de los partidos y límites de Fujimori

La memoria y el olvido no son inocentes. Los ciudadanos querían renovar la política en un país sacudido por la crisis económica y la violencia política. En esas circunstancias el pasado, cualquier pasado político, se lo vinculaba a una historia de incertidumbres y temores de los que se quería salir. Fujimori en 1990 era quien no tenía nada para explicar o excusarse ante un electorado desconfiado. Fijando en los medios de comunicación una imagen de eficiencia y ubicándose en una posición de centro (a diferencia de Vargas Llosa) logra pasar de advenedizo a vencedor. En las elecciones de 1995 los ciudadanos decidieron darle el apoyo a quien tenía una direccionalidad precisa frente a las ambigüedades de una oposición que en su mayoría se propuso reconocer logros del gobierno y elaborar a la vez una crítica al candidato que postulaba para la reelección, un complicado modelo para armar donde las piezas no terminaron por encajar.

Paramio ha recurrido a la imagen de Moisés convocando al pueblo a emprender la travesía del desierto para explicar las reelecciones de Fujimori y de Menem. Quizás no importaba tanto llegar a la tierra prometida. La hiperinflación y la violencia terrorista asociadas al gobierno de Alan García dejaron sentimientos de acoso y peligro en el conjunto de ciudadanos que están «dispuestos a mantener su confianza en un gobierno que parece darles, sino otra cosa, sí al menos la seguridad de que no se repetirá». Y el aumento del desempleo y la pobreza trabajan a favor de los gobernantes «porque acentúan el sentimiento de precariedad, de incertidumbre»¹. La gente que está atravesando un desierto cuyas arenas queman ante la falta de alternativas de la oposición prefiere proseguir por la misma ruta. El sistema se alimenta de las dudas que suscitan sus propias reformas. La sensación de lo inacabado exige dar término al recorrido y sólo a partir de allí, desde un lugar descansado y seguro, los ciudadanos podrán evaluar con serenidad las distintas opciones que se le presentan.

Estaríamos ante una cesión de autoridad que coincide con la conocida interpretación de O'Donnell sobre el surgimiento de las democracias delegativas. El titular del ejecutivo en una situación de emergencia termina siendo el único portavoz y símbolo reconocido de la unidad nacional cuando el país parece estar viviendo una crisis terminal. Por estas razones el presidente tiene entonces el derecho y el deber de concentrar poderes, incumplir promesas electorales, legislar con decretos de urgencia, plantear opciones plebiscitarias en base a un supuesto dilema entre el orden y el caos e incluso transgredir el orden constitucional como se hizo en el Perú en el golpe de abril de 1992.

¹ Ludolfo Paramio: «La travesía del desierto. Reelecciones en Argentina y Perú» en Argumentos No 15, 6/1995, Instituto de Estudios Peruanos, Lima.

Sin embargo esta representación por delegación, como caracteriza este estilo Hanna Pitkin, encuentra en el Perú un límite. El líder, libre aparentemente de tomar las decisiones que se le ocurra, no puede delegar a su vez en personas de su confianza cargos políticos sujetos a votación. En las elecciones municipales de 1995, Fujimori presenta candidatos únicamente para las provincias de Lima y Callao. En ambos casos es derrotado por aspirantes que protestan su independencia de los partidos pero que han tenido una destacada trayectoria en organizaciones políticas: Alberto Andrade en Lima y Alex Koury en el Callao. Un presunto líder carismático no puede confiar en la suerte que van a correr los seguidores a quienes invistió de autoridad. Esta peculiar situación puede dar lugar a interpretaciones encontradas. El presidente no puede jugar con su capital político, generar nuevos réditos y ganar. En su persona queda inajenable la idea de eficacia asociada al reconocimiento de presuntos logros que exhibe en sus recorridos por las distintas provincias del país. Se impuso tanto la idea de un mandato unificado en que el oficial no puede entregar su bastón. Es Fujimori el que consigue convencer a la mayoría del carácter antielitista de su prédica. Puede realizar gestos simbólicos vistiendo ropas tradicionales de las distintas zonas del país y dar al mismo tiempo una imagen inverosímil y simpática que la población no considera impostada, sino expresión de un comportamiento plebeyo consustancial a su personalidad. Y a los políticos de partidos presentarlos como una oligarquía. Este liderazgo se basaría entonces en la posesión de cualidades y dones intransferibles. El presidente puede apoyar pero no invertir. Sólo cuando su candidatura es la que se encuentra en juego se impone un estilo plebiscitario en el que Fujimori por ahora sale ganando. En los demás casos, y ante la falta de diferencias significativas en ideas y propuestas entre los candidatos -como ha ocurrido en las últimas elecciones municipales- se opta por las personas que inspiren confianza, provenientes de las listas oficialistas o de otros movimientos. Quizás Fujimori, enfrentado a estos nuevos hechos y a sus propias ambiciones, impulse una reforma de la constitución para que el presidente pueda ser reelecto por más de dos períodos sucesivos, probable anticipo de lo que va a ocurrir antes que un razonamiento demasiado audaz.

En cualquier hipótesis, no estamos ante un mercado político en el que las élites políticas compitan con sus ofertas ante los ciudadanos, ni tampoco en un Estado politizado en el que distintos grupos de interés presionan por modelar las instituciones estatales usando recursos de poder bajo su control -característica del inestable pacto social de la etapa de la industrialización por sustitución de importaciones y de predominio del populismo.

Los gobernantes no median ni arbitran, más bien imponen su voluntad. El Estado peruano recupera su autoridad sobre el territorio y las personas después de una

cruenta guerra renuncian a su soberanía económica ante los organismos internacionales y la banca. Un proceso nuevo está ocurriendo en lo relativo al ejercicio del poder y la representación cuando se tiene que hacer un esfuerzo para precisar quiénes toman las decisiones, y las élites políticas no pueden identificarse y hasta corresponde dudar de su relevancia.

El círculo del poder

Desde 1981, una empresa de estudios de opinión pública (Apoyo) realiza anualmente una encuesta sobre quiénes ejercen el poder en el Perú, dirigida a élites políticas, empresariales, militares, religiosas y académicas. Al margen de cuestiones metodológicas, la existencia de una serie de quince años permite verificar los cambios ocurridos. Los dirigentes del partido de gobierno y los más destacados de la oposición predominaban en las diez primeras posiciones durante la década del 80. En los años 1993, 1994 y 1995 se sitúan en los lugares de privilegio los asesores. Uno de ellos, Vladimiro Montesinos, ocupa el segundo lugar después de Fujimori en dichos años; Santiago Fujimori el quinto y el comandante en jefe del Ejército el tercero. Los dirigentes y congresistas de los partidos ya no están en los primeros diez lugares. Los asesores no tienen un cargo preciso en la estructura del Estado, aunque se sabe el marco general de atribuciones (Montesinos, los servicios de Inteligencia y Santiago Fujimori la ayuda externa y las políticas sociales). Ellos no tienen apariciones públicas y en la percepción o imaginación de los opositores parecen estar en varios sitios al mismo tiempo. Las élites políticas son desplazadas de la escena pública por la creciente importancia de los técnicos. Los profesionales de los organismos internacionales y los del gobierno dialogan desde una plataforma común y quedan entonces por resolver cuestiones de detalle. Es cierto que estos técnicos pueden ser presionados por líderes como Fujimori, pero frente a las decisiones cotidianas se manejan en una esfera incontaminada de política y sociedad.

Como ha sido señalado con acierto por Markoff y Montesinos, ya no pueden separarse con relativa facilidad -como acostumbraba Weber-, soluciones técnicas y políticas. En efecto, los límites se han vuelto imprecisos, los políticos transfieren a los técnicos la resolución de cuestiones decisivas; el conocimiento especializado pasa a convertirse sin muchas mediaciones en un discurso generalista, atributo que se creía propio de quienes desempeñaban cargos electivos en el aparato del gobierno².

² John Markoff y Verónica Montecinos: «El irresistible ascenso de los economistas» en Desarrollo Económico No 133, 4-6/1994, Buenos Aires.

Esta orientación de las nuevas burocracias se plantea en parecidos términos cuando se trata de desarrollar políticas sociales. Surge una nueva élite técnica deliberadamente distante del diálogo con políticos y autoridades locales, renuente al control por parte de la comunidad y con un *sprit de corps* donde sólo los pares y las más altas jerarquías ministeriales y de gobierno son reconocidos como interlocutores válidos. Estos profesionales tienen por lo general una carrera organizada en base a traslados previsibles a otros cargos en el sector público y privado, que les permite desarrollar un comportamiento aparentemente neutral respecto a los conflictos y presiones de la política.

El desplazamiento de las élites políticas tiene que ver también con la influencia de los medios de comunicación. Estos, en el conjunto de su programación y no únicamente en los espacios informativos y periodísticos, seleccionan los temas relevantes y los que no lo son y fijan imágenes de las personalidades de la vida pública de las que ellas difícilmente pueden desprenderse. Castiglioni recoge una afirmación de Piero Ignazzi: en la medida que el político debe presentarse como un «hombre común», semejante a la mayoría, sólo que con mayor grado de experiencia, «la apelación populista deviene una suerte de subproducto del videopoder»³. Pero, ¿hasta qué punto?, ¿cómo hacerlo? El líder puede seguir en una plaza o un congreso las reacciones del público, cambiar el énfasis y las propuestas, imaginar la idea de comunidad aunque sólo sea en el momento en que está hablando. Para los medios se requieren asesores, el político debe calcular lo que debe decir en pocos minutos, controlar gestos ante una pregunta inesperada o agresiva, cuidar los mínimos detalles de su vestimenta, y sólo con los informes desapasionados sobre niveles de audiencia y de aprobación enterarse de lo que ha ocurrido y saber finalmente si la población descifró el código en los mismos términos en que quiso plantearlo. Fujimori puede combinar la calle y los medios, realimentando un circuito con el otro. En su intervención en medios de comunicación da la impresión no sólo que domina el escenario sino que es el dueño del espacio apareciendo intempestivamente, extendiendo la duración del programa si lo considera necesario, regulando el orden de las preguntas ante periodistas aquiescentes. Y en la calle recupera la idea de comunidad a la que son sensibles las antiguas élites políticas haciendo pronunciamientos ante la multitud en pequeños poblados, ciudades, barrios marginales, que otra vez es transmitida por los medios. En el «set» es el político experimentado, en la calle una persona preocupada y cercana al pueblo que lo eligió⁴.

³ La observación es tomada de «Actores antipolíticos de la democracia. Una mirada al caso Berlusconi en Italia», ponencia presentada en el Congreso de Ciencia Política organizado por la Universidad de Lima, noviembre de 1994.

⁴ Las Fuerzas Armadas y en menor medida las élites empresariales son parte de estos poderes tácticos, pero tratar este tema excede los propósitos de este artículo.

Los políticos oficialistas

Es ilustrativo de los problemas de consolidación democrática en el país el hecho de que para hablar de las élites políticas previamente debiera hacerse referencia a los poderes tácticos⁵. En tiempos de cuestionamientos, los individuos interesados en mantenerse o ingresar a la vida pública deben asumir un nuevo estilo de presentación, intentando (re)ubicarse en un sitio relativamente seguro. Las oportunidades de darse a conocer y de intervención no están garantizadas, ni se presentan los hábitos y rutinas de negociación, compromiso y definición de líneas claras de la oposición, propias de un país donde existe un sistema de partidos estable. Tienen que actuar con audacia e improvisación, dentro de una sociedad que cambia y con un liderazgo que se ha afirmado. En lugar de una clase política conocedora de los resortes del poder y sus mecanismos de acceso, encontramos actores diferenciados, los políticos oficialistas y los independientes que en conjunto disponen de mayor poder e influencia que quienes hayan permanecido en algún partido.

El político oficialista explica el comienzo de su carrera pública como consecuencia de la preocupación que sentía ante un país convulsionado por el terrorismo y la crisis económica. Quienes comienzan su actividad después del golpe de abril de 1992 afirman haber sido ganados por la vocación de servicio que las circunstancias exigían cuando por fin el presidente Fujimori encaró sin vacilaciones las decisiones que despejaban el camino. Contrastan la transparencia de sus motivos y decisiones con las carreras políticas de los años previos, que caracterizan como una sinuosa trayectoria dentro de los laberintos burocráticos partidarios, intercambiando favores y prebendas. Estos políticos destacan la diferencia entre lo que ellos consideran la democracia formal, basada en reglas y procedimientos, de la democracia sustantiva, vinculada a las finalidades del buen gobierno.

A partir de este punto de partida común, las opiniones de los políticos oficialistas adquieren acentos y matices distintos. Algunos de ellos vinculan su concepto de democracia con una visión optimista de lo social: con el gobierno de Fujimori se inicia una nueva etapa en la que va a existir una verdadera igualdad de oportunidades. Una sociedad volcada al mercado otorga probabilidades de éxito a los pequeños empresarios que demuestren dedicación e inventiva. Apoyados por un gobierno eficaz estos actores se convierten en los sujetos privilegiados del cambio que se avecina, una consecuencia de este repliegue a lo privado, ahora que se conocen «las reglas de juego» es, en opinión de estos políticos, la disposición de

⁵ En esta sección y la siguiente se toma como referencia el artículo de Romeo Grompone y Carlos Mejía: «Los estilos políticos al final de un ciclo partidario», elaborado a partir de la interpretación de entrevistas a congresistas y alcaldes que se incluye en su *Nuevos tiempos, nueva política*. Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 1995.

los ciudadanos a la delegación de tareas en el Ejecutivo sin interés por establecer mecanismos de fiscalización y control ciudadanos.

La segunda percepción de la democracia de los políticos oficialistas se centra en un cuestionamiento a las instituciones vigentes entre 1980 y 1992. Crítica *in toto* a estilos de conducción, personalidades presentes en los gobiernos y mecanismos del propio régimen político; entre ellos, la «intromisión» del parlamento y las distorsiones presuntamente introducidas por los partidos. La verdadera democratización depende, según ellos, del tipo de personal político que accede a los cargos representativos; se conciben a sí mismos con la capacidad de renovar la vida pública del país frente a la marginación y al desconocimiento de sus méritos, que entienden haber sufrido en el pasado, remitiendo de nuevo, en nueva clave, a la idea de igualdad de oportunidades. Dada la situación a la que se ha llegado, la política que corresponde aplicar debe rechazar los compromisos que, en su percepción, cargan con la hipoteca del condicionamiento y llevan a la ineficacia y la inacción. El apoyo ciudadano al golpe de Estado de abril de 1992 y la reelección del presidente en 1995 les indica que lo que una vez fue excepcional resulta ahora convalidado, circunstancia indicadora, para este grupo de políticos, que ante una situación de emergencia la democracia no puede solucionar sus problemas recurriendo a sus propios medios.

Algunos políticos oficialistas entienden finalmente que la democracia es sólo un recurso a utilizar según el tiempo político: en el país la democracia fue sometida a prueba y no demostró la debida fortaleza para afrontar situaciones excepcionales. Frente a una coyuntura crítica, el liderazgo debe actuar sin condiciones puesto que expresa un poder constituyente que no reconoce las antiguas limitaciones legales siendo suficiente con apelar al pueblo, que toma como referente, pero en el que no advierte condiciones para organizarse⁶.

En un país convulsionado por la violencia y la crisis económica, la unidad política debe restaurar un nuevo orden en el que puedan ser identificados los enemigos internos. Entre éstos se incluye a los políticos, concebidos en parte como responsables de haber precipitado una situación caótica, y a los partidos y el parlamento, que permitieron el ingreso insidioso de intereses políticos, conspirando contra el estilo ejecutivo que el momento requería. La política tiene que estar necesariamente personalizada en un caudillo o conductor, ya que sólo su intervención providencial puede resolver una situación que no parece tener salidas posibles.

La mayor parte de estos políticos tiene un vínculo incierto con el presidente. Llegaron a un movimiento sin estructuras estables y ahora sufren las consecuencias

⁶ Algunos de estos políticos siguen el pensamiento de Cari Schmitt con conocimiento previo. En otros es un razonamiento de sentido común menos sofisticado.

de la carencia de una base organizativa; circunstancia que les permitió en su oportunidad alcanzar el cargo pero que ahora les dificulta mantenerlo. La condición de operadores políticos y la frecuentación de los medios le otorga al grupo de políticos más destacados la seguridad deseada. Pero para la mayoría no existen tales garantías y certezas. La alternativa entonces es tratar de ubicarse en una estructura de mediación que vincula al gobierno con diversos sectores. La tarea no resulta sencilla, considerando la concentración de poder del ejecutivo y la tendencia presidencial a delegar decisiones en las mencionadas burocracias especializadas, de procedencia no política y en la mayoría de los casos desinteresada en ingresar directamente en ella. Teniendo en cuenta el recorrido permanente que hace el presidente por provincias y distritos urbanos y campesinos, los congresistas del gobierno buscan ubicarse como eslabones de una línea de mando -imaginaria o real- que va del presidente al político, del político a las autoridades locales y de éstas al conjunto de la comunidad.

Estos políticos oficialistas formulan juicios y opiniones, y expresan sentimientos relacionados con Fujimori, donde combinan interpretaciones sociales con el reconocimiento a la superioridad presidencial y el carácter providencial de su intervención. Atribuyen la irrupción de Fujimori a la distancia existente entre élites y sociedad, generada por los desaciertos y la torpeza de la clase política derrotada. El presidente restituye un vínculo entre gobernantes y gobernados que se había deshecho en los años de vigencia de la democracia. El carácter providencial del liderazgo de Fujimori conduce a los políticos oficialistas a aceptar los mecanismos de delegación. Ellos no pueden asumir su condición de representantes sino remitiéndose directamente a Fujimori. El control horizontal de los poderes del Estado no puede tener aplicación en el orden impuesto.

Fujimori es apreciado además por su inteligencia, expresada en su capacidad para entender los problemas del país y encontrarles rápidamente soluciones, y en su astucia y audacia, que lo hacen estar en todas las situaciones, por delante de sus opositores. Los políticos oficialistas perciben en Fujimori la posesión de calidades intelectuales superiores. No lo ven, sin embargo, como un líder carismático que «rescata» a una sociedad desamparada en lo afectivo y en lo social mediante un mensaje de redención, si bien algunos congresistas de segunda línea expresan una admiración sin condiciones en la que se conjugan el agradecimiento y la devoción.

La estrategia de los independientes

En los comicios municipales de noviembre de 1995 la mayoría de alcaldías fueron ganadas por quienes habiendo sido políticos de partidos desistieron de pertenecer a alguna organización y se proclamaron independientes. En los partidos de centro

y derecha, por lo general las rupturas no fueron precedidas de expresiones abiertas de discrepancia respecto a la organización política. Muchos de estos nuevos independientes, habiendo sido anteriormente alcaldes, regidores o dirigentes locales, estaban acostumbrados a tomar decisiones con considerable margen de discrecionalidad.

En efecto, las estructuras y normas partidarias sólo funcionaban a nivel de las direcciones centrales, los representantes parlamentarios y su entorno cercano. Las instancias de coordinación se hacían más laxas o simplemente dejaban de funcionar cuando intentaban extenderse al conjunto de miembros activos. Quizás tampoco interesaba hacerlo. Las personalidades de un partido, los barrios de Lima o las ciudades de provincia, tenían influencia por su prestigio en la zona, sustentado a partir de acuerdos informales con otras organizaciones políticas o con asociaciones de la comunidad.

En los hechos, entre la dirección partidaria y sus representantes a nivel local existía un acuerdo implícito. El partido le daba al candidato a alcalde o regidor la cobertura que éste necesitaba al integrarlo a una propuesta de alcance nacional que le otorgaba márgenes de credibilidad. Los postulantes sabían que tenían libertad para definir prioridades y alianzas en el ambiente en que se movían sin necesidad de atenerse a las instrucciones estrictas de una dirección central. Los miembros más destacados de los partidos sentían que estaban sumando votos que les permitían acceder o mantenerse en el parlamento o en los concejos provinciales. Aparentemente ganaban todos y además se proyectaba la imagen de un partido descentralizado y democrático que confiaba en la capacidad de todos sus integrantes.

Esta división de tareas podía mantenerse mientras las organizaciones políticas tuvieran niveles de influencia en el gobierno o en los poderes locales. Cuando en 1990 se advierte la crisis de los partidos, quienes ahora son independientes disponen de una opción de salida. El apoyo que encontraron en provincias y distritos hoy pueden atribuirlo a su propia capacidad de convocatoria.

Los integrantes de los partidos de izquierda, en cambio, por lo general fundamentan su retiro debido a discrepancias con la dirección y tienden a hacer un ajuste de cuentas respecto a las ideas y prácticas de su grupo, acompañado a veces de una referencia crítica a su propio modo de conducirse.

Los independientes dirigen una crítica a los partidos políticos en tres direcciones: el de las jefaturas, la estructura de la organización y la militancia. A nivel de liderazgos cuestionan las prácticas caudillistas y la inconsistencia de una autoasignada condición de arbitro por parte del líder, cuando intervenía abiertamente a favor de un individuo en particular o de una corriente de opinión. A partir de esta interpretación, los independientes denuncian el estilo de

comunicación de los jefes partidarios, que fomenta un comportamiento de masas en el que los ciudadanos quedan anulados y lo emocional se impone al razonamiento. Quienes adhieren a candidatos independientes serían en cambio, para estos políticos, ciudadanos guiados por un cuidadoso cálculo utilitario; saben lo que les conviene porque un largo período de desengaños los lleva a tomar distancia respecto a los proyectos colectivos y las promesas de transformaciones radicales.

La segunda crítica de los independientes se sitúa a nivel de las direcciones centrales e intermedias, enfatizando las relaciones clientelares que permitan controlar a militantes y adherentes. Esta crítica en parte responde a la debilidad del partido, en tanto organización, incapaz de crear una estructura lo suficientemente compleja y diferenciada para generar razonables expectativas de carrera política. Predominaban en cambio reacomodos arbitrarios o injustificados. Los dirigentes de segunda línea, con arraigo en su localidad, muchas veces no encontraban los caminos apropiados para avanzar en niveles de reconocimiento, y a veces ni siquiera sabían qué papel les tocaría en el momento cuando se tomaran nuevas decisiones.

Los militantes, por su parte, son considerados por los independientes como base de maniobra de las cúpulas cuando el partido alcanza posiciones de poder en el gobierno, en el parlamento o en el nivel local. En esta situación se produciría inevitablemente una reconversión de expectativas. Los militantes reclamarán su puesto en el poder reivindicando las credenciales de una larga trayectoria y la fidelidad a una causa cuando no se avizoraba el poder. Quienes recién llegan al partido lo hacen para obtener a corto plazo beneficios y prebendas. La conclusión inevitable de estos políticos, es que de una u otra manera se seguirá expandiendo el clientelismo. La opción de ser independientes cuando el partido pierde apoyo les permite a los políticos denunciar estas prácticas que probablemente consideraban inevitables cuando pertenecían a la organización.

Los partidos tienen, a criterio de estos independientes, dos caminos sin salida; fortalecer las direcciones, lo que conduce a instituir una oligarquía, o democratizarse, medida propicia para manipulaciones de dirigentes de segundo nivel que utilizan sus clientelas y promueven resoluciones en beneficio exclusivo de un reducido grupo de afiliados.

Para estos independientes, el Perú recién está saliendo de una situación crítica y es irreal pensar que pueda implantarse una democracia formal. Esta opinión responde al rechazo a la política como escenario de deliberación. Desde 1980 cuando se instaura la democracia, los dirigentes partidarios afrontaron dificultades para alcanzar consensos. Predominaba una cultura de confrontación, que gradualmente se fue debilitando al comprender la importancia de la negociación

política. Para estos independientes, en cambio, cualquier negociación tiene una connotación negativa porque la asocian a un arreglo espurio y no a concesiones recíprocas para tomar decisiones y evitar la incertidumbre.

Rechazan la dimensión pluralista de la democracia porque entienden que el orden político no requiere atender demandas particulares. Asumen una definición esencialista del interés general. En cada reivindicación partidaria, a su criterio, acecha el peligro de las prebendas, las ambiciones personales, de la búsqueda desesperada de un vínculo con los electores dejando de lado cualquier consideración sobre el bien común, tal como ellos lo conciben. A diferencia de los políticos oficialistas, los independientes carecen de admiración y respeto incondicional hacia el presidente. Se identifican en cambio con el estilo centralizado en la toma de decisiones, el que evita a su juicio demoras innecesarias o eventuales casos de corrupción por parte de quienes ocupan cargos intermedios en la administración.

Estos independientes por lo general se consideran una extensión y otras veces un contrapeso del poder de Fujimori. El titular del ejecutivo se ocupa de la definición de las líneas generales de la acción política mientras ellos se encargan de un tratamiento sectorial. Cuando se trata de alcaldes, sus decisiones son inconsultas o en base a medidas puntuales dirigidas a grupos pequeños y bien definidos, lo que desalienta la articulación de intereses -alrededor de los cuales pueden reaparecer los fantasmas de la vieja política. Algunos de los independientes que han obtenido éxito —el caso de Alberto Andrade, alcalde de Lima- reclutaron el personal de su movimiento sustituyendo a los políticos profesionales por una «meritocracia» definida de acuerdo con criterios establecidos por ellos mismos. La selección de sus acompañantes en teoría se realiza evaluando currículos y con una entrevista, como si se tratara de la oficina de personal de una empresa o de una agencia especializada de provisión de personal calificado. Quienes son reconocidos de acuerdo a estos criterios no se representan más que a sí mismos y dependen del líder tanto o más que un militante en relación a un jefe de partido. La discrecionalidad se presenta como objetividad tecnocrática. Quizás no sea casual que este estilo atraiga a antiguos cuadros profesionales de los partidos o de quienes algunas vez fueron influyentes en estas organizaciones. El desencanto por la falta de proyectos y utopías se compensa mediante un inesperado reconocimiento de sus calidades profesionales. En este estilo fujimorista sin Fujimori encuentran ahora una nueva oportunidad.

Informalidad y política

Refiriéndose a la informalización de la política atribuida a la extensión de redes y acuerdos entre las élites que transgreden con frecuencia la propia legalidad democrática, Lechner llama precisamente la atención sobre la falta de anclaje institucional de la política en América Latina y la paradoja de una sociedad de mercado que requiere de un marco institucional para su regulación estable y al mismo tiempo inhibe el proceso de su consolidación⁷. Quizás en el caso peruano pueda pensarse este proceso enfatizando otras características de la informalidad. La irrupción de los políticos a los que hicimos referencia se caracteriza desde Fujimori por la facilidad de entrada - ¿de otra manera cómo explicar su triunfo?-, iniciativas individuales que parten de una limitada base de recursos, flexibilidad en los discursos y los compromisos, extrema diferenciación entre los que lograron imponerse y quienes quedaron excluidos, habilidad para convertir los fracasos de otros en oportunidades para llegar con nuevas ofertas a los ciudadanos, convertidos en clientes. En suma, entre el sector informal de la economía y de la política se registran coincidencias que no parecen ser casuales.

Los políticos que hemos descrito ocupan casi todo el campo de la escena oficial cuando no existe como referencia un sistema de partidos. Los estudios de representación en el caso peruano se preocupan de modo casi normativo sobre lo que debiera existir -mediaciones institucionales y grupos de intereses pautando los acontecimientos de la sociedad civil-más que por identificar lo que está ocurriendo en el presente. Una preocupación legítima por la reivindicación de un orden político deseado no debiera impedir un esfuerzo de descripción de la actual situación política, especialmente si existe consenso sobre los radicales cambios que se producen con la llegada de Fujimori al poder en 1990, el golpe de Estado en 1992 y la reelección en 1995. Es una preocupación razonable, sin embargo, preguntarse sobre lo que puede ocurrir en los años venideros. Es probable que superado el problema del terrorismo y la hiperinflación los ciudadanos comiencen a tomar en cuenta los problemas económicos que plantea el modelo establecido por el gobierno y busquen otras opciones. La población aceptó sacrificarse para encontrar una salida pero, para seguir con el ejemplo de Paramio, ¿qué hacen si descubren que no existe la tierra prometida? Probablemente seguirán votando por independientes, en el mejor de los casos por un candidato que tenga un entorno de personas preocupadas por buscar la consolidación democrática.

En los planos social y cultural en el Perú ha ocurrido un proceso democratizador. La mayoría de los ciudadanos tienen conciencia de sus derechos y la aspiración de

⁷ Norbert Lechner: «Las transformaciones de la política», ponencia presentada al seminario «Fault Lines of Democratic Governance in the Americas», Centro Norte-Sur, Universidad de Miami, 1995.

que exista igualdad de oportunidades va dejando atrás un secular proceso de jerarquías estamentales que respondían a razones de clase, étnicas y de género. Este proceso ha sido relativamente breve si se considera que para su surgimiento han tenido influencia decisiva las migraciones internas y la expansión educativa, generalizadas en la década del 60. No existen bases para sostener la existencia de una cultura política autoritaria en la población, aunque todavía haya que seguir en esta ambigua situación que conduce al optimismo en lo social y al pesimismo en lo político.